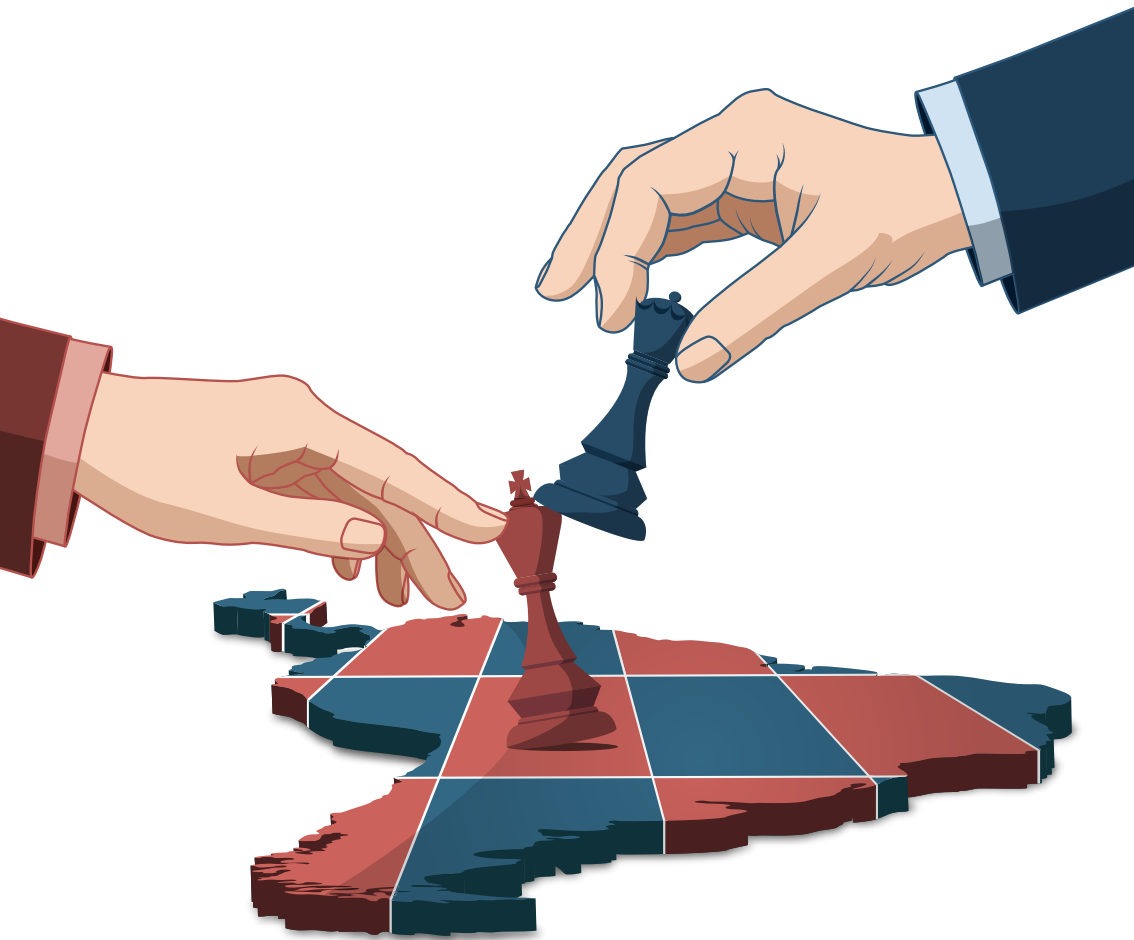


E C U A D O R

Debate 122



Élites y derechas en América Latina

Élites y derechas en América Latina

Comité Editorial

Alberto Acosta, José Laso Rivadeneira, Simón Espinoza, Fredy Rivera Vélez,
Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero, Eduardo Gudynas

Directores

Francisco Rhon Dávila (1992-2022)

José Sánchez Parga (1982-1991)

Coordinadora/Editora

Lama Al Ibrahim

Asistente Editorial

Gabriel Giannone

ISSN: 2528-7761

ECUADOR DEBATE

Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 - 2523262

E-mail: revistaed@caapecuador.org

www.caapecuador.org/revista-ecuador-debate

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

Exterior: USD\$. 51.00

Ecuador: USD\$. 21.00

Ejemplar suelto exterior: USD\$. 17.00

Ejemplar suelto Ecuador: USD\$. 7.00

Portada y diagramación

David Paredes

Impresión

El Chasqui Ediciones

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por los miembros del Comité Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*.

Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © ECUADOR DEBATE. CAAP.

| ÍNDICE

COYUNTURA

Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural ¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda? Fernando Bustamante	5-26
La derecha al poder en la Argentina (1983-2023): los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA) Santiago C. Leiras	27-41
Conflictividad socio-política Marzo – Junio 2024 David Anchaluisa	43-56

TEMA CENTRAL

Presentación del Tema Central: Élite y derechas en América Latina Miguel Ruiz Acosta	57-62
La derecha peruana y su deriva neogolpista Anahí Durand Guevara	63-78
Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador Franklin Ramírez Gallegos	79-99
Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010 Alexander Gamba Trimiño	101-125
La derecha en México: entre el Yunque y Vox Hugo Sánchez Gudiño	127-142

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas	143-161
Andrés Tzeiman	
La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina	163-178
Ariel Goldstein	

DEBATE AGRARIO

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos	179-191
Luis Alberto Tuaza Castro y Rudi Colloredo-Mansfeld	

ANÁLISIS

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales.	
El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo	193-209
Xavier León-Vega, María Fernanda Solíz, Claudia Rodríguez y Alía Yépez	

RESEÑAS

La (des)regulación de la riqueza en América Latina.	
Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia	211-214
Danilo Rosero	
Pensamiento agrario: derribando mitos.	
Una antología de la obra de Fausto Jordán	215-219
Pablo Ospina Peralta	

Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador

Franklin Ramírez Gallegos*

Resumen

El artículo analiza el lugar del antipopulismo en el proceso de radicalización de la derecha ecuatoriana en la última década. A partir de la reconstrucción de los macroprocesos de contienda y de los específicos espacios de conflicto abiertos en el país tras el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana (2007), el trabajo sitúa la emergencia del anticorrelismo como enclave de articulación de múltiples líneas de oposición política (2010-2016) y atiende su despliegue como plataforma electoral y ejercicio de poder estatal de las derechas tras el giro de 2017. A diferencia de otros casos regionales, el devenir radical de la derecha criolla no concierne la implantación exitosa de liderazgos u organizaciones extremas, sino la progresiva transformación de su identidad colectiva desde la polarización con el correlismo a la contrarreforma estatal y el escalonamiento de la violencia política en tres gobiernos consecutivos.

Introducción

El 24 de mayo de 2021, en su toma de mando, el banquero Guillermo Lasso (2021-2023), remarcó su compromiso con las libertades individuales, la integración del Ecuador a los mercados globales y el equilibrio de poderes. La promesa de restaurar la República –tras un “largo tiempo de autoritarismo” y “culto al caudillo” durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017)– fue transversal en su discurso. Días antes, sin embargo, Jaime Nebot, líder del más importante partido de la derecha ecuatoriana desde el retorno a la democracia –el Partido Social Cristiano (PSC)– revelaba que sectores del empresariado, el entonces Contralor y sectores afines al nuevo presidente tenían preparado un golpe de Estado si el candidato de la Revolución Ciudadana (RC) triunfaba en el balotaje.¹ El entrevistador –cabeza de un poderoso portal digital multimedia conservador– no cuestiona la revelación; está familiarizado con la operación de marras. “¡Ah! El Plan Yerovi”, dice; Nebot asiente. Ninguna instancia de la justicia, ni el poder parlamentario, iniciaron indagación alguna ante tales declaraciones.

* Profesor investigador del Programa de Sociología Política de FLACSO-Ecuador.

1 Ver la entrevista en: Plataforma X Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial), <https://n9.cl/nvjhb>.

En su crudeza, la imagen condensa tres dinámicas concurrentes en la política ecuatoriana hace más de una década: a) la disponibilidad de las élites para combatir por cualquier medio a quien consideran su principal enemigo; b) la normalización de la violencia, el odio y el hostigamiento como repertorios de acción política contra la RC; y c) la implantación de una extensa coalición sociopolítica que sostiene los embates autoritarios de las derechas contra específicos opositores. Tales elementos suponen un abierto proceso de radicalización de la derecha criolla, incubado al interior de la confrontación con la RC y sedimentado con el retorno de las élites al poder desde 2017. Motorizado por un anticorreísmo extremo, dicho cuadro advierte una mutación de la identidad política de las derechas y estrecha el espacio democrático en medio de una vertiginosa contrarreforma estatal que apuntala los grandes intereses económicos e instala el padecimiento generalizado de las mayorías.

Semejante dinámica no es ajena a la controversia latinoamericana en torno al populismo. Entre otras de sus aristas, aquella entraña el temor exacerbado de las élites –y de facciones de las clases medias– a la politización, autonomía y ascenso de sectores subalternos o plebeyos en el espacio político. El antipopulismo ha sido definido como un curso de identificación colectiva que se construye como pura contraposición, negación y repulsión a elementos populistas de diverso tipo (Stoessel y Bracco 2024). Como sugiere Semán, en el antipopulismo “el rechazo es el dispositivo interno de una visión política que construye una mirada orgánica” (2021, 13). Se trata de una política de reactividad plena, sin vista de ir más allá de la negatividad. Desde esa mirada, los grupos dominantes perfilan la deslegitimación, domesticación o desmonte de la incorporación de “los de abajo” en la comunidad política. En efecto, si bien tales plataformas federan actores de diverso signo –derechas, liberales, izquierdas– y se configuran como engranajes transideológicos (Van Dyck 2019), terminan conducidas por las derechas y desde el protagonismo de las élites tradicionales (Enríquez 2019). En cualquier caso, los específicos contornos del antipopulismo deben ser leídos a la luz de los ciclos de irrupción popular contra los que se instituyen, aún si beben de representaciones peyorativas “históricamente sedimentadas” (Stavrakakis 2017), a saber, el populismo como matriz inherentemente demagógica, autoritaria, etc.

El caso bajo estudio se inscribe en la “tercera ola populista” del siglo XXI. Tras una intensa década de movilización social, dicha oleada combinó el acceso democrático de las izquierdas al poder, la reorientación postneoliberal de la agenda pública y cierta apuesta geopolítica que amplió la autonomía regional respecto a EE.UU (Grugel y Riggirozzi 2012). Sucesivas reelecciones presidenciales prolon-

garon la hegemonía progresista e incubaron un singular momento de debilidad de las derechas. Si bien aquello no deterioró por completo su influencia institucional, a causa del poder estructural de las élites (Luna y Rovira Kaltwasser 2014), sí fraguó un escenario de confrontación y voluntad de bloqueo de parte de grupos económicos, gremios empresariales, medios, organizaciones de la alta sociedad civil, etc., junto a las derechas partidarias. Aunque la intensificación del conflicto fue más notoria en las experiencias sostenidas por liderazgos decisionistas –Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina–, no pasó desapercibida en los procesos de cambio más gradual, como lo retrata el golpe de 2016 y la irrupción bolsonarista en Brasil. Quizás por ello, tras la crisis progresista, la pandemia y en un clima global que nutre diversos radicalismos de derecha (Stefanoni 2021), se ensanchó el espacio de ideas, narrativas y contramovimientos beligerantemente antipopulistas, anti-izquierdistas, antifeministas, contrarios al avance de derechos o políticas redistributivas. Ganaron eco, además, tesis paleolibertarias, anarcocapitalistas y discursos regresivos. Estas claves de “batalla cultural” prepararon el terreno para el avance de las derechas extremas, el vaciamiento de las tendencias moderadas y la estabilización de lógicas radicales en el juego político (Ramírez Gallegos 2023).

Ahora bien, si los nexos entre antipopulismos y derechas saltan a la vista en el reciente ciclo político regional, sus específicas líneas de retroalimentación deben ser situadas en cada caso. En el Ecuador la implantación anticorreísta –un subtipo paradigmático de antipopulismo similar a constelaciones como el anti-kirchnerismo, el antievismo, etc.– moldea la vigente radicalización de la derecha criolla en una trama que ensambla su lugar como núcleo de oposición al gobierno de Correa con su ejercicio del poder estatal tras el giro político de 2017. En el corazón de tal proceso se coloca una disposición al desprecio de la legitimidad de determinados adversarios y al tratamiento de aquellos como enemigos a ser borrados del juego político.

Visto así, el caso ecuatoriano remite menos a la emergencia de una figura o de una derecha partidaria extremista –recurrente tópico en la literatura politológica contemporánea– que a una progresiva radicalización del conjunto de la derecha criolla. La vía local difiere entonces de los liderazgos personalistas exitosos (Bolsonaro, Milei, Bukele) o de los avances electorales de organizaciones extremistas (el Partido Republicano de Antonio Kast en Chile, Cabildo Abierto en Uruguay, etc.). En Ecuador el proceso asume formas incrementales desde la polarización con la RC, hasta el escalonamiento de la beligerancia y violencia política en tres gobiernos consecutivos (L. Moreno, 2017-2021; G. Lasso, 2021-2023; D. Noboa, 2023-2025). Políticas de odio, discriminación, estigmatización, judicialización,

securitización, entre otras formas de confrontación, se encadenan como artes de gobierno y administración del conflicto mientras se afirma el proyecto autoritario de las derechas y el despojo en curso.

La cuestión de cómo se llegó a este punto es clave para el análisis. Explicar un proceso político, dice Tilly, es describirlo a cabalidad. En ese ejercicio, situar la *emergencia* de un fenómeno y los cambios a él asociados asume plena importancia. Aquello demanda sensibilidad a la secuencia de los acontecimientos descritos y sus interconexiones. Si la reconfiguración de la derecha criolla se labra al interior de la prolongada polarización con la RC, la centralidad del anticorreísmo en sus marcos, esquemas de pensamiento y formas de acción es fundante de su radicalización. A su vez, en cuanto forma de confrontación que niega de modo regular y hasta el límite de la violencia directa la legitimidad de particulares adversarios, dicho fenómeno se estabiliza con la captura estatal de las élites, y se profundiza a medida que sucesivos gobiernos de derecha expanden dicha lógica hacia nuevos oponentes.

En línea tillysiana, los trayectos de radicalización se examinan desde el rastreo de los macroprocesos de contienda y la reconstrucción del espacio relacional del conflicto. Solo entonces aparece la radicalización como una forma de confrontación surgida, entre otras opciones posibles, al interior de la lucha política (Alimi et al. 2015). Si la mirada procesual y relacional alerta sobre la combinación de regularidad y contingencia en la lucha política, la observación de las opciones colectivas que llevan a la radicalización apunta a los *agenciamientos estratégico-tácticos* de los actores en función de sus acotados objetivos. Bajo tal comprensión, este trabajo interroga los contextos, interrelaciones contenciosas y opciones estratégicas que han dado cuerpo al devenir radical de las derechas en el Ecuador del siglo XXI.

Giro a la izquierda y nuevo conflicto

El acceso de Correa y su movimiento (Alianza País – AP) al poder en 2007 se produjo en medio de la crisis hegemónica del bloque que impulsó la liberalización económica desde los ochenta. A pesar de las reformas constitucionales que en 1998 intentaron relegitimar al proyecto neoliberal, las sucesivas caídas presidenciales (1997, 2000, 2005) de cambio de siglo señalaban hasta qué punto las élites y partidos dominantes desde la transición democrática habían perdido capacidad de dominio del conjunto social. Además de las frustradas promesas de la modernización conservadora (crisis bancaria 1999-2000), el empuje de la

movilización social fraguó dicho desgaste. El protagonismo del movimiento indígena fue descollante en ese cuadro. Su impugnación al neoliberalismo se articuló con el proyecto de reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. Aquello abrió espacios de negociación que permitieron a las organizaciones indígenas y a otros sectores sociales conquistar garantías y representación institucional. La relativa permeabilidad del Estado neoliberal a ciertas demandas identitarias contrastaba con el veto de la tecnocracia financiera al debate democrático de la agenda promercado.

Antes de la aparición de Correa, el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) fue el último intento del sistema político para conciliar heterogéneos intereses (banca, Fuerzas Armadas, organizaciones populares). Aunque se alineó a Washington y prosiguió la ruta neoliberal, el coronel llegó al poder con banderas postajuste y en coalición con Pachakutik (PK) –brazo electoral del movimiento indígena– y el Movimiento Popular Democrático (MPD), las fuerzas más presantes de la izquierda para entonces. Una inédita movilización ciudadana facilitó su caída (2005) tras su intento de copar el poder judicial para recomponer su gobernabilidad. La fallida coalición desprestigió al movimiento indígena mientras la legitimidad partidaria y la agenda neoliberal quedaban asfixiadas.

El agotamiento de los actores centrales del conflicto político –la derecha tradicional y el movimiento indígena– facilitó el ascenso de Correa. Nutrida de vieja y nueva militancia izquierdista, y de las redes de proximidad del presidente, AP produjo su propia base e infraestructura organizativa. No dependió de las organizaciones sociales en su confrontación con las élites, la ortodoxia de mercado, la “partidocracia”. Bajo tal estrategia, la acumulación del movimiento fue meteórica. El carrusel electoral² para viabilizar la Constituyente minó a la derecha y encumbró a Correa. Su posterior performance electoral sería igualmente impresionante: reelecciones presidenciales sin balotaje (2009, 2013), sucesivas mayorías parlamentarias (2007, 2009, 2013, 2017), nacionalización de la representación, etc.

La fuerza del voto operó como principal recurso para que la RC se colocara por encima de grupos económicos y actores políticos y sociales con capacidad de veto. El anclaje popular de Correa le permitía invocar la representación de las grandes mayorías y erosionar la legitimidad de los “no electos”. Las opciones para la participación popular se estrecharon. Diversas líneas de reforma estatal

2 Entre 2007-2008 se convocó a: Consulta Popular para convocar la Constituyente; elección de asambleístas; y Consulta para aprobar la Carta Magna. La RC se impuso en los tres sufragios.

facilitaron a la vez el desacople institucional entre intereses privados y acción pública. En la estela del jacobinismo revolucionario (Rosanvallon 2008), la RC sospechaba de toda presencia particularista en las instituciones. Así, mientras la matriz estatal del “neoliberalismo multicultural” de los noventa hacía crisis, en la cima del poder se afirmaba una gestión decisionista y reacia a la negociación y al intercambio con adversarios y aliados.

Si en el curso de la Constituyente la polarización abierta entre la RC y la “partidocracia neoliberal” consiguió configurar un amplio espacio progresista en apoyo a la Carta Magna, tras su aprobación se resquebrajaron sus cuerdas. Sectores de la izquierda y los movimientos sociales resintieron la falta de diálogo político, el estrechamiento de los espacios de representación colectiva en el Estado y la inercia extractivista. El distanciamiento giró progresivamente hacia la confrontación, muchas veces gestionada solo con respuestas de fuerza desde el poder.

Desde las derechas, por su parte, la impugnación se disparó con la misma convocatoria a la Constituyente. Rechazaron la vía refundacional, la retórica socialista y la visión estatal-nacionalista del desarrollo de la RC. La campaña para la aprobación del nuevo texto (Consulta Popular, septiembre 2008) visibilizó ya su capacidad de movilización en diversos frentes. Además del embate mediático, destacaron los colectivos “provida” y otras asociaciones vinculadas con el clero en varias demostraciones contra la “constitución abortista”, el “matrimonio homosexual” o el “totalitarismo estatal” en la educación.³ La debilidad de las derechas,⁴ durante y después de la Constituyente, incentivó siempre su mayor agitación extrainstitucional. Van Dyck (2020) documenta diversos casos en los que la escasa competitividad electoral de la derecha, en medio de la solidez populista, la empujan a salidas disruptivas. Con una débil representación y un ejecutivo reacio a conciliar, tal fue una de las opciones de la derecha en años siguientes.

La articulación antipopulista

El *tempo* revolucionario de las reformas postconstituyentes prosiguió con el estrechamiento del debate público. AP hacía uso de su bloque mayoritario para acelerar la aprobación de las nuevas normas de la República. En tal entorno, el 30 de septiembre de 2010 estalló una obscura protesta policial contra la Ley de Servicio Público diseñada por el Ejecutivo. Entre otros aspectos, la ley planteaba

³ Ver al respecto: “Iglesia católica no acepta 4 temas de nueva Constitución”, en *El Universo* (2008).

⁴ En la Convención, la derecha (cuatro partidos) obtuvo solo 25% de los asientos; en la Legislatura 2009-2013 alcanzó 38% de las curules (cuatro partidos). Entre 2013-2017 descendió otra vez a 17%.

reordenar categorías laborales en el Estado, reducir poderes corporativos y recorrer prebendas a las fuerzas del orden (Stoessel 2013). El gobierno denunció un golpe en ciernes. Mientras, el sindicato docente –bajo control del MPD– llamó a movilización general, sectores del movimiento indígena se solidarizaron con el motín y la derecha pedía amnistiar a los sublevados. El *putsch* escenificaba así cierta insólita confederación entre derechas, policía y gremios populares contra la reforma estatal (Quintero y Silva 2011). No sería su último acercamiento.

Tras horas de encierro en un hospital policial, Correa fue liberado por cuerpos militares en medio de un tiroteo que causó varias víctimas. Los sucesos fueron transmitidos en vivo a lo largo del día. No obstante, la decisión oficial de centralizar las emisiones en los medios públicos fue contestada como un intento de manipular la información. En adelante, el esclarecimiento e interpretación de los hechos –¿motín o golpe?– y la adjudicación de responsabilidades y penas intensificó la polarización. Para el anticorreísmo no hubo desestabilización, sino un legítimo reclamo policial que derivó en violencia debido al estilo pendenciero y la baja disposición negociadora del presidente.

Un enmarcado antiautoritario tomó desde entonces centralidad en el discurso de las élites al costado de sus denuncias contra la “chavización” del gobierno y el recorte de libertades. La alusión a cierta “defensa de la democracia” renovaba la restringida narrativa neoliberal de la derecha. La extensa producción académica sobre el inexorable carácter autoritario del populismo ocupa un destacado lugar en dicha trama (Weyland 2019). Al hacer de cierto liberalismo el único referente normativo de la democracia, dicha literatura propone una comprensión unidimensional de los nexos entre populismo y des-democratización (Ramírez Gallegos y Stoessel 2018). En Ecuador este corpus enfatiza en la capacidad del populismo para corroer las instituciones en nombre de las fantasías redentoras del caudillo de turno (Enríquez 2019).

Si la “cuestión democrática” tuvo un lugar secundario en la campaña con que la derecha tradicional retomó la disputa electoral en 2013⁵ –primera candidatura de Lasso–, la tentativa de Correa (2015) de reformar la Constitución para habilitar la reelección indefinida permitió expandir dicho marco y hacer del rechazo a la concentración de poder un objeto mayor de movilización. Se multiplicaron los llamados a las calles. Se hacía evidente la voluntad de incluir a los más amplios sectores en el espacio de las derechas y de disputar el terreno de la sociedad civil.

5 En 2009 la derecha oligárquica no presentó candidatura. Destacó la ausencia del PSC. Nebot se refugió del ascenso de la RC invocando, desde el poder municipal, la autonomía local.

Ésta era invocada como polo de resistencia al “populismo autoritario” y como lugar para resolver aquello que el “Estado obeso” no conseguía tramitar. En el terremoto de 2016 emergió, de hecho, la tesis filolibertaria de que el voluntarismo cívico debía desplazar al Estado en la gestión de la catástrofe.

Tras ampliar su campo discursivo y sus esferas de intervención, las derechas consiguieron liderar el miniciclo de conflicto 2015-2017 que plasmó al anticorreísmo como enclave de identificación colectiva de heterogéneos sectores. Su punto más alto fue la movilización contra “los impuestos marxistas” que Correa pretendió colocar a las grandes herencias y a la especulación inmobiliaria (2015). Bajo la consigna *con mi familia no te metas* –usada también por grupos provida–, las élites comandaron una potente demostración de fuerza que, junto con la expatriación de divisas, doblegaron al expresidente. El ataque a las ideas de igualdad y redistribución, así como la defensa de los patrimonios familiares, convocaron a sectores medios y populares contra una medida que afectaba al 2% más rico. La clase dominante hacía pasar su agenda como asunto de interés general. El canto destituyente “fuera Correa fuera” era coreado por todo el arco opositor. El anticorreísmo expandía sus contornos. En medio de las protestas, exhibiendo *banderas negras*, una caravana de autos de alta gama pretendió emboscar a Correa en el aeropuerto de Quito. Tras el *odio* al personaje, los signos de un más amplio antiprogresismo empezaban a emerger. La implicación de ciertas organizaciones en las calles colaba una capa de niebla sobre tal deriva.⁶

Además del retiro del proyecto de tasar las herencias, la “marcha de las banderas negras” forzó el abandono de la reelección indefinida⁷ y condicionó la designación de Lenín Moreno como candidato oficialista para 2017, cerrando opciones para una sucesión por parte de las izquierdas. Como vicepresidente (2007-2013) de Correa, Moreno nunca mostró convicciones políticas y prefirió aparecer como figura conciliadora en las antípodas del líder. En campaña confesó incluso su distancia con el programa postneoliberal de su movimiento. Aunque procuraba así hablar a sectores ajenos al correísmo, no pudo imponerse en primer turno. En su segunda candidatura (2017), Lasso alcanzó el balotaje. Incluso MPD y Pachakutik lo apoyaron: la configuración transideológica del antipopulismo facilitaba el crecimiento electoral de la derecha.

La candidatura de Lasso se movió entre batalla ideológica y cruzada moral. Desde años atrás la Fundación Ecuador Libre –un tanque de pensamiento presi-

⁶ Para Houtart (2015) la derecha provocó un profundo malentendido y logró que “una buena parte de la clase media baja, y aún campesinos e indígenas, reaccionen contra medidas para repartir la riqueza”.

⁷ Correa retiró el proyecto de reelección inmediata y propuso una enmienda para que rija desde 2021.

dido por Lasso y entroncado con redes de la extrema derecha global-⁸ había expandido la circulación de ideas libertarias en su abierta disputa programática con el “socialismo del siglo XXI”. Entre otras de sus tesis, los libertarios niegan que Ecuador hubiera vivido nunca un ciclo de economía de mercado. Dicha idea solo era parte de la “mitología populista” con que la izquierda justificaba el retorno del “Estado expansivo”.⁹ Además de su promesa de restaurar las libertades cercenadas por la RC, Lasso presentó un programa privatizador como vía para sanear el Estado de la “corrupción populista”. En campaña, el país amaneció cada día con nuevos escándalos ventilados en medios públicos, privados y un emergente enjambre de plataformas digitales cercanas al anticorreísmo. La batalla de denuncias arrojó la política al fango de las “fake news” y la postverdad. Las imputaciones a Jorge Glas, binomio de Moreno, tuvieron particular resonancia.

Aunque creció 21 puntos en segunda vuelta, Lasso fue derrotado. De inmediato, y sin pruebas, denunció fraude y llamó a movilización contra la autoridad electoral: “Incendaremos Quito hasta nuevos resultados”. Lasso anticipó a Donald Trump (2021, EE.UU.), Keiko Fujimori (Perú, 2021) o Jair Bolsonaro (Brasil, 2023) en la táctica de ensuciar elecciones y desconocer resultados. Ni la apertura de urnas ni el informe de la OEA, persuadieron al banquero. Sus seguidores intensificaron más bien los discursos de odio contra la RC.

Austeridad permanente y violencia política

Con la victoria de Moreno, el anticorreísmo se hizo del poder. El giro político fue profundo. Si su trama y razones aún no generan consenso –abundan tesis conspirativas– es claro que en esos años (2017-2021) terminó el predominio de la RC y el Estado fue reencuadrado hacia el neoliberalismo (Freiro y Sánchez 2021).

El curso de los sucesos puede ser trazado como una veloz recomposición de las alianzas y redes de poder en medio de las fracturas del oficialismo y la beligerancia de una oposición que nunca reconoció el triunfo del nuevo presidente. Fragilizado por la tesis del fraude y las denuncias contra su segundo a bordo, Moreno apostó a sostener su gobernabilidad con el apoyo de las élites. La apertura de un Diálogo Nacional (2017-2018) con los detractores de su antecesor –banqueros, medios privados, empresarios, indígenas, etc.– marcó un primer quiebre con su movimiento. Las críticas de Correa no tardaron, pero nunca condujeron al gobierno.

⁸ Hace parte de Atlas Network, comunidad transnacional de tanques de pensamiento liberal-libertarios.

⁹ Refiero al libro de Caicedo y Tanca (2018). Aparicio Caicedo fue alto consejero presidencial de Lasso, director de Ecuador Libre, coordinador de la Cátedra Hayek y encargado del programa de CREO.

Si el Diálogo dio apariencia consensual al nuevo momento, también facilitó el dominio de la agenda pública por los grandes intereses. Chiasson-LeBel (2019) entiende el viraje de Moreno como resultado de la readecuación estratégica del empresariado ya en el curso del propio gobierno de Correa y aprovechando su declive.¹⁰ Los circuitos previamente dibujados se activaron totalmente cuando Moreno –siempre complaciente con las élites– toma el poder. No en vano el canal para la incidencia empresarial en la política económica –el Consejo Consultivo Productivo Tributario (junio 2017)– fue el primero en activarse como parte de los diálogos y el único que se sostuvo en el tiempo. Más tarde, dichos sectores tendrían pleno control del gobierno. A cambio de su apoyo, exigieron a Moreno “descorreizar” el Estado.

Esa demanda enhebró básicamente dos líneas de acción: el desmonte de la matriz estatal construida tras diez años de política neodesarrollista y la anulación del correísmo como sujeto político. Lo primero remite a una serie de agresivas contrarreformas económicas, lo segundo, al despliegue de violencia política sobre una específica identidades. Si la anulación de la RC operó como recurso político para avanzar en la reforma estructural, nunca dejó de ser un objetivo en sí mismo. El escalonamiento en radicalidad de la derecha atiende a este “fin último” y a la internalización de una lógica política en que todo adversario toma el nombre del enemigo (correísta).

La captura del poder

En *Neoliberalism by surprise* Stokes (2001) estudia los problemas de legitimidad democrática de gobiernos latinoamericanos que, como el de Moreno, llegaron al poder con un programa contrario al Consenso de Washington y luego lo implementaron por entero. Si Fujimori en el Perú de los noventa superó el impasse trocando seguridad –derrota de Sendero Luminoso– por ajuste estructural, en Ecuador ésta se justificó en nombre del combate a la corrupción. Austeridad y recorte del Estado fueron presentados como consecuencia directa de la “crisis moral” y del “despilfarro populista” que malograron la economía a pesar de los abundantes recursos que Correa administró en una década.

El “discurso anticorrupción” operó entonces como marco maestro y principal mecanismo de legitimación del nuevo ciclo estatal. Si en los años previos tal era

10 Para los grupos económicos, el ciclo gubernativo de la RC fue mucho más acuciante por su extrañamiento del poder que por el cabal deterioro de sus ventajas estructurales de acumulación.

la narrativa de las derechas, con Moreno fue también el lenguaje del poder.¹¹ La cantaleta del carácter intrínsecamente opaco de la economía del Estado popular repicaba en todas partes: el estatismo solo engendra políticos inescrupulosos y desvío de fondos. Así, ortodoxia fiscal y Estado mínimo se posicionaron como categorías morales para recomponer la economía. Desde ese mismo enmarcado, se hilvanaron una serie de escándalos públicos y la sobreactuación de las autoridades de control para multiplicar los expedientes contra la RC. El circuito retroalimenta primeras planas, *trending topics* y decisiones judiciales.

Al tiempo en que exfuncionarios y cuadros políticos eran procesados, el conjunto de la política pública de la RC se sentaba al banquillo. Más allá de la razonabilidad de las denuncias, estaba en juego erosionar su prestigio y debilitar su organización. Con el retiro de funciones (agosto 2017) y la fulgurante detención de Jorge Glas (enero 2018), en el marco del capítulo Odebrecht Ecuador, el relato anticorrupción ganó en credibilidad y potencia. AP implosionó. Buena parte de la mayoritaria bancada parlamentaria pasó a alinearse con el gobierno. En ese clima, el Contencioso Electoral permitió a Moreno la expropiación de AP (enero 2018), el imbatible instrumento electoral de la RC. La medida era emblemática, con la determinación de la derecha para *poner fin a la RC como sujeto político*. En los años siguientes, el correísmo estaría virtualmente proscrito.

La Consulta de febrero 2018 completó la captura anticorreísta del poder. Sin partido y con su imagen golpeada, Correa sufrió su primera gran derrota electoral. El pueblo apoyó eliminar algunas de sus emblemáticas decisiones (impuestos a la plusvalía, reelección indefinida) y mandató a que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe y destituya, de ser necesario, a autoridades nombradas previamente con irregularidades. Casi todos los evaluados fueron removidos. A pesar de sus esfuerzos por probar anomalías, los consejeros transitorios recibieron presiones para destituir autoridades básicamente por su cercanía a Correa (Celi 2020). Figuras insignes del anticorreísmo pasaron a ocupar la jerarquía de las instituciones de control, electoral, justicia.

Neoliberalización y enemigo interno

Copado el poder, la derecha exacerbó sus expectativas. La designación de Richard Martínez (mayo 2018), presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, como ministro de Economía selló el pacto de dominación entre las élites y Moreno, y

11 Para aludir a los problemas del fisco Moreno repetía: “la mesa no está servida”, “se lo llevaron todo”.

gatilló una serie de reformas pospuestas hacía mucho. Martínez operó la reunificación empresarial durante el gobierno de Correa (Chiasson-Lebel 2019). A su costado llegaron otros representantes de grupos económicos a carteras como Comercio Exterior o Relaciones Laborales en un proceso de captura empresarial de la agenda pública (Guamán y Stoessel 2022).

La “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (LFP, agosto 2018) fue la carta de presentación de Martínez. Para Brenner, Peck y Theodore (2021) los procesos de neoliberalización instituyen esquemas regulatorios que apuntalan la gobernanza de los mercados a través de políticas destructivas y constructivas. La LFP configuró una sofisticada bisagra entre ambas dimensiones. En su *faz destructiva*, la ley atacó los mecanismos de autofinanciamiento del Estado y el papel económico del sector público: quedó prohibido que éste crezca más de 3% anual; se restringió la movilización de crédito interno para gestionar liquidez;¹² se reforzó la interdicción para que el saldo de deuda pública total no supere el 40% del PIB y se estipuló que, salvo excepciones, el presupuesto sea aprobado con déficit solo para cancelar intereses de deuda. Salgado (2018) llamó la atención sobre la directa introducción del manejo ortodoxo del fisco como ley orgánica. En su *faz creativa*, la LFP reconfiguró el entorno para las inversiones. Por un lado, introdujo un sistema internacional de arbitraje de inversiones en cualquier materia, lo que –rompiendo la Constitución– bloquea las facultades estatales para privilegiar determinadas inversiones según los objetivos nacionales de política. Por otro, debilitó los esquemas impositivos: renunció a gravar los incrementos extraordinarios en los precios de los recursos naturales, redujo el impuesto a la salida de divisas, entre otros. Las facilidades tributarias a futuros inversores se complementaron con anuncios de mayor flexibilización laboral y una enorme remisión tributaria favorable a los grupos empresariales.

Así, entre un exacerbado antiestatismo y el mantra de la atracción de capitales, la LFP fue un punzante instrumento para la expansión del poder de los mercados tras la prolongada interrupción populista. Su aprobación dio paso a una nueva entente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo 2019. El realineamiento del Ecuador con los EE.UU facilitó las cosas (Ruiz 2019). Tras la visita del vicepresidente Mike Pence en junio 2018, se multiplicaron las señales de rompimiento con el embrionario regionalismo sudamericano promovido

¹² Se anuló el Código Monetario y Financiero (2014) y el Programa de Inversión Doméstica de Excedentes de Liquidez de la Reserva Internacional, clave para gestionar la crisis de 2016 (Chiriboga 2019).

en el ciclo progresista. El fin del asilo a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y su entrega a la justicia británica en abril 2019 fue, no obstante, la decisión clave con que Moreno asentó la nueva subordinación a Washington. Más tarde, Ecuador reconocería (2019) a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, dejaría UNASUR y OPEP y redoblaría la cooperación con EE.UU en materia de seguridad. La embajada norteamericana ha sido un activo vigilante de la transición postcorreísta.

La celeridad del ministro Martínez evitó que la Asamblea y la Corte Constitucional se pronuncien sobre el acuerdo con el FMI, como ordena la Carta Magna. Proseguía la imposición del nuevo rumbo económico de espaldas al debate democrático. Como siempre, el crédito del FMI condicionó una serie de reformas estructurales. Así, el 1 de octubre de 2019, Moreno anunció draconianas medidas para “equilibrar el fisco”. El fin de los subsidios a los combustibles fue particularmente impactante. El decreto 883 incrementó de modo sustantivo el precio del diésel y la gasolina extra. Desde la crisis de la deuda de los ochenta todos los gobiernos exploraron la opción de eliminar dichos subsidios. El temor al conflicto les disuadió. No fue así en 2019: la unidad del bloque dominante, la fragilidad de su gran opositor y las ambivalencias populares hicieron pensar al gobierno que el “tiempo había llegado”.

La paralización que siguió al 883 no estaba en los cálculos de nadie. Era la más grande protesta popular desde 1990. La autonomía y la disposición de lucha de los manifestantes –una multitud plebeya, heterogénea y desorganizada– forzaron a la dirigencia popular, indígena y sindical, a masificar la convocatoria a las calles. El país se paralizó por doce días en medio de una inusitada violencia estatal.¹³ La narrativa oficial –luego convertida en discurso de Estado– denunció un intento de golpe y trató el conflicto como un problema de seguridad interna. En lenguaje anticorreísta, Maduro fue presentado como cerebro de la revuelta. El movimiento indígena, que terminó por liderar el paro, quedó así retratado como parapeto de los “amigos de Correa”. En medio de la declaratoria de estado de excepción –que habilita el despliegue conjunto de policías y militares– el ministro de Defensa reivindicó que “las FFAA, orgullosamente, tienen *experiencia de guerra*”.¹⁴ La lucha social se fijaba como objetivo bélico. Se insinuó su carácter

13 Ver Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (2019): *Verdad, Justicia y Reparación. Informe de verificación sobre DDHH, Paro Nacional y levantamiento indígena. Quito-Ecuador. Octubre 2019*. El informe de Defensoría al respecto provocó la persecución y encarcelamiento de su entonces titular.

14 En una entrevista televisiva al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en “Los Desayunos de 24 Horas”, *Teleamazonas*, 7 de octubre de 2019 (20:14-20:20). Disponible en canal YouTube: <https://n9.cl/vfgxw>.

terrorista. Nada disuadió a los manifestantes. Tras tensas negociaciones con la dirigencia indígena, Moreno derogó la medida.

El levantamiento endureció más al poder. La frustración de Carondelet impregnó todo el juego político con pautas coercitivas. El guion sobre la “conspiración bolivariana” atravesó las redes de inteligencia, las fuerzas del orden, los grandes medios y portales digitales y el activismo de Fiscalía. La “corrupta RC” ahora era, además, golpista. Durante el paro, Moreno emitió siete cadenas nacionales para inculpar sin evidencia a Correa y Maduro. La ministra del Interior llegó a anunciar la detención de diecinueve migrantes por actitudes sospechosas y supuestas intenciones de atentar contra el vicepresidente. Fue un caso de falsos positivos contra trabajadores venezolanos.¹⁵ El odio político excusaba delitos de xenofobia. La máquina antipopulista nunca puso freno a su encono ni abandonó el guion. Apenas finalizó el paro, tres altos dirigentes de la RC fueron detenidos por supuesta rebelión; otros salieron al exilio. El miedo tomó forma política. Los procesados se contaban por decenas e incluían a la nueva generación de dirigentes indígenas que lideraron la revuelta. Las fronteras del “enemigo interno” se ensanchaba.

Con el aterrizaje del Covid-19, el confinamiento abrió la oportunidad para que el gobierno retomara la hoja de ruta del FMI sin mayor resistencia. Así, no solo se liberalizaron los precios de los combustibles –medida neutralizada por el paro de 2019– sino que se flexibilizaron todas las condiciones de contratación, salarios y negociación de conflictos laborales a favor del capital. El estado de excepción para gestionar la pandemia facilitó la desmovilización y permitió la aprobación exprés de la norma (Ley Humanitaria, mayo 2020). Asimismo, prosiguieron los recortes de burocracia y presupuesto. Ecuador fue el país latinoamericano con menor gasto fiscal (0,7% del PIB) durante la pandemia: *austeridad permanente*. El ministerio de Economía efectuó además onerosos pagos de deuda externa e hizo una renegociación “exitosa” con acreedores internacionales. El reperfilamiento ocasionó una modesta reducción de capital, pero tuvo un altísimo costo de oportunidad en medio de la peor crisis social del siglo (King 2020). Los escasos recursos públicos disponibles se destinaron a opacos tenedores de bonos mientras los hospitales públicos colapsaban. El gobierno exhibía como logro la confianza de los mercados. Naomi Klein habla de doctrina del shock cuando los desastres colectivos son usados para apalancar reformas favorables a los poderosos y a la profundización de las desigualdades.

15 Ver el Informe sobre el Caso #Falsos Positivos (Observatorio de Derechos y Justicia, Organización Venezuela en Ecuador, y Acción Jurídica Popular 2019).

Antipopulismo ampliado

El Paro de 2019 extremó la beligerancia antipopulista y ensanchó su radio de descalificación. A partir del encono al correísmo, una lógica de violenta polarización pasó a conducir los modos de relacionamiento del bloque dominante con adversarios reales o imaginados. Lasso señaló cualquier gesto de oposición, incluso en la esfera parlamentaria, como conatos golpistas. Mientras la continuidad de la contrarreforma estatal y la austeridad permanente estrechaban la coalición anticorreísta, más inclinada lucían las derechas al desconocimiento sistemático de la legitimidad de sus críticos.

El cómodo triunfo de Lasso en balotaje (abril 2021) no hacía presagiar tal escenario. La primera victoria electoral de la derecha en el siglo XXI abría la ocasión para materializar su promesa de refundación democrática. En campaña, de hecho, Lasso habló de un “gobierno del encuentro”. Sugería la necesidad de superar la polarización constitutiva del período y gobernar por consensos. La elección de una asambleísta de PK a la cabeza de la Asamblea parecía certificar dicha apertura. La nueva mayoría no se correspondió, sin embargo, con el diseño del Ejecutivo ni configuró un espacio de acuerdo político. En el espejo de Correa, Lasso imaginó para sí una “presidencia imperial” en que se entreveraba su lugar como patrón de un emporio bancario y su encumbramiento como nuevo jefe de la élite antipopulista. La sobreestimación de su fuerza democrática le impidió reconocer que contaba solo con 10% de los escaños y que carecía de toda base partidaria. Aun así, rompió con su socio electoral, el PSC, y retomó la diatriba anticorreísta contra unos y otros. Así, ante las primeras señas de inconformidad social, vinculó protesta con desestabilización, prometió mano dura a “los anarquistas” y respaldó a policías y militares querrellados por atentados a los DD.HH.

El paro plurinacional de junio 2022 –segundo mega estallido del ciclo– llevó esta matriz política al paroxismo. El nuevo levantamiento contestó, como en 2019, al alto precio de la gasolina y el diésel como efecto del sistema de flotación de bandas instalado en 2020. El resto de las demandas presentadas por el movimiento indígena, diez en total, testimoniaban el brutal deterioro de las condiciones de vida en el campo y la ciudad y bosquejaban medidas puntuales para sostener mínimos de dignidad social en medio del shock neoliberal. La represión fue inmediata. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, fue detenido apenas iniciado el paro. Con el trasfondo del colosal incremento de la violencia,¹⁶ la protesta ya

16 Entre 2020 y 2023 la tasa de homicidios intencionados creció de 7,8 a 42,6 por cada cien mil habitantes.

no fue solo encajonada como golpista, sino como delincuencial. Si en 2019 se acusó al bolivarianismo de sostener el “entente” entre correístas e indígenas, esta vez se aludió al papel del narcotráfico. Se sugería que la economía criminal estaba detrás de los supuestos intentos destituyentes de Correa y de la propia movilización indígena (*El Comercio* 2022). Lasso y su entorno acudieron también a la jerga uribista de la “guerrilla urbana”¹⁷ y volvieron a hablar de terrorismo. Mientras una clave contra-insurgente se instalaba en el nuevo orden estatal, Policía y FFAA pasaban a ocupar las primeras líneas del frente político. El movimiento indígena se emplazaba como nuevo enemigo del orden. La cruzada anti-RC giraba hacia una campaña contra el conjunto de la izquierda y la resistencia popular.

Ahora bien, si la consagración de Lasso en 2021 fue inobjetable, el trayecto que condujo a las elecciones de ese año no transcurrió en condiciones de competencia justa. Tras ser expropiada de su instrumento electoral en 2018, la RC fue sistemáticamente imposibilitada de operar como movimiento político autónomo en los comicios de esos años (Hernández 2023). Dicha virtual interdicción expresó del modo más elocuente la voluntad de las élites de desaparecer al correísmo como sujeto político. En 2018 se arguyó que la denominación de “Revolución Ciudadana” para el nuevo movimiento ya era parte de la imagen de AP, ahora en manos de Moreno. El segundo episodio fue aún más absurdo: los órganos electorales establecieron que la etiqueta de Revolución Alfarista¹⁸ no se correspondía con la identidad socialista de la organización. Ante el bloqueo, la RC debió participar en alianza y con siglas prestadas en las seccionales de 2019. En 2020, no obstante, Contraloría intervino para retirar el registro de Compromiso Social (CS), movimiento con el que el correísmo aspiraba a terciar en las elecciones generales de 2021. El Contralor –un poderoso alfil anti-correísta hoy preso– amenazó con destituir a los vocales electorales si incumplían su fallo. Aunque la amenaza no pasó, era inocultable que la proscripción a la RC era una acción de Estado. El correísmo inscribió sus candidaturas in extremis y participó con nueva imagen, sigla y casillero.

En paralelo al acoso sobre la organización política, innúmeras causas judiciales llovieron sobre Correa y la dirigencia histórica. El paraguas anticorrupción

17 Álvaro Uribe y el entonces presidente Iván Duque hablaron de una “revolución molecular disipada” para referir al estallido colombiano de 2021 (Chaparro 2022). El término fue acuñado por un neonazi chileno –profesor en academias militares en Colombia– y expandido por referentes de la derecha regional tras los estallidos de esos años. En Ecuador, en medio del paro de 2022, la intelectualidad cívico-militar cercana al régimen usó el mismo discurso. Ver: Pazmiño (2022). “Estas son las estrategias de desestabilización empleadas para destruir el país”.

18 La revolución liberal (1895) siempre ha sido reivindicada por la RC como parte de su base ideológica.

eslabonaba múltiples procesos. Por lo regular, las acciones de la justicia –y en particular las acusaciones de Fiscalía– se filtran a ciertos medios y portales noticiosos que cocinan efectivos escándalos públicos, rentables para desprestigiar a los acusados de turno y enardecer a la ciudadanía. Si la destitución y apresamiento de Jorge Glas fue el primer golpe a la imagen correísta, el proceso abierto a Correa se llevó todas las luces. La velocidad en la tramitación de la casusa estaba atada a la cercanía de las elecciones de 2021. Para el anticorreísmo, que siempre retrató a la militancia de la RC como una masa sin convicciones propias subyugada por el líder, era imperativo descabezar al movimiento e impedir cualquier candidatura del expresidente. En abril de 2020 es sentenciado a ocho años de prisión por “instigación e influencia cognitiva” sobre sus subalternos en supuestos casos de sobornos a empresarios. Todo fue muy rápido. Por comparar: las acusaciones penales (2000) contra el también expresidente Jamil Mahuad¹⁹ se procesaron catorce años después. A la vez, su casación presentada en 2017 se resolvió en tres años. Con Correa todo se consumó en dieciséis meses²⁰ y la casación en 72 horas. El doble estándar de los fallos judiciales apoya las denuncias de RC sobre una guerra jurídica en su contra.

Como fuere, entre las denuncias sobre corrupción, golpismo o delincuencia, el embate sobre el correísmo ha trabajado de modo menos ruidoso, pero igualmente consistente, sobre los cuadros y militantes del movimiento y sus representaciones sociales. La violencia instrumental fijada desde arriba moviliza en la sociedad el resentimiento, el odio y otras “tristes pasiones”, reforzando clivajes y permitiendo a quien la despliega escenificar la defensa de ciertos valores frente a peligrosos enemigos (Illouz 2023). Así, en la administración pública, la discriminación laboral por razones políticas transcurrió como ley no escrita. Las escenas de ocultamiento de la identidad militante ante el riesgo de señalamientos de cualquier tipo persisten en diversas esferas. El desprecio a las bases del movimiento, etiquetadas como sometidas e irreflexivas, se sintetiza en su caricatura como un rebaño de borregos²¹ al mando del pastor carismático. La máquina anticorreísta ha querido marcar con el signo del oprobio el cuerpo social del correísmo, su existencia como organización, identidad colectiva y compromiso individual. La

19 Gobernó entre 1998-2000 y fue sindicado como responsable del crack bancario y la incautación de los ahorros ciudadanos en 1999.

20 Ver la cronología del caso en: González, Mario (2020). “Un trámite falta para que se ejecute la sentencia de Rafael Correa”. *Primicias*.

21 Surgidas de la mesosfera, las imágenes de los “borregos correístas” abundan en medios tradicionales. En un ejercicio de reversión de estigma, el correísmo se apropió de dicho símbolo en la campaña electoral de 2023.

lógica del deterioro y descrédito de ciertas identidades a través de la estigmatización bien puede explicar tal proceso (Goffman 1970).

Cuando en 2023 ante el magnicidio de un candidato presidencial, diversos agentes del anticorreísmo –actores políticos, Fiscalía, portales digitales, etc.– inculparon a la RC por el crimen, estaban operando sobre la base de ese prolongado curso de estropeo y menoscabo de su imagen pública. El impacto sobre la dinámica electoral fue inmediato y explica en parte el triunfo del actual presidente Daniel Noboa. Similar escena tuvo lugar en 2021 –en medio del segundo turno con Lasso– cuando se acusó al candidato correísta de estar financiado por la guerrilla del ELN. La Fiscalía llegó a recibir a su par colombiano para inefables indagaciones. La operación política revelaba las cuerdas transnacionales de la derecha radical. Más que una acotada línea de confrontación que transcurre a nivel de los símbolos y las representaciones se trata, entonces, de una intervención directa de opacos poderes sobre el proceso democrático y las libertades políticas de la ciudadanía.

Paradójicamente, sin embargo, el recurso a la descalificación del correísmo es moneda corriente en los intercambios en el espacio político nacional. Incluso las organizaciones sociales lo han incorporado en sus repertorios discursivos como forma de diferenciación y confrontación dentro y fuera de sus redes (Zambrano 2022). En la asimilación popular del lenguaje anticorreísta se vislumbra el enraizamiento y la potencia política –¿una verdadera operatoria “transformista”?– del ciclo de radicalización de las derechas. Dicha eficacia política corre por cuenta también de la capacidad del antipopulismo para implicar en dicha lógica de relacionamiento y desprecio a los múltiples “otros” que define, según la coyuntura, como nuevos enemigos. Tal desplazamiento sugiere que más que una acotada dinámica de negación de una determinada identidad, el anticorreísmo ha terminado por producir particulares modos de experimentación y comprensión de la vida política que refuerzan las vías de la confrontación y la disposición radical de las derechas a delinear rígidas fronteras identitarias.

Tras la reciente declaratoria de “conflicto armado interno” (enero 2024) por parte del presidente Noboa, múltiples actores sociales y organizaciones de derechos humanos denunciaron la violencia militar en las cárceles y en las calles. Rápidamente, tales sectores fueron situados en la orilla de los “zurdos” y diabolizados como enemigos de la seguridad. Los ataques en su contra explotaron. Tal es

el legado del vigente ciclo de predominio de una derecha que escala en radicalidad a medida que la crisis social se asienta y su ejercicio de poder requiere mayor coerción y miedo en la sociedad. La “guerra de Noboa” al crimen organizado solo puede reforzar estas coordenadas. No en vano, aunque llegó al poder impugnando la polarización – “no soy anti-nada” –, tras apenas cinco meses de gobierno invadió la Embajada mexicana en nombre del anticorreísmo más ramplón. La derecha criolla no puede ya hablar otro lenguaje.

Bibliografía

- Alimi, Eitan Y., Lorenzo Bosi y Chares Demetriou. 2015. *The dynamics of radicalization: A relational and comparative perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Brenner, Neil, Jamie Peck, y Nik Theodore. 2011. “¿Y después de la neoliberalización? Estrategias metodológicas para la investigación de las transformaciones regulatorias contemporáneas”. *Urban*, 1: 21-40. <https://n9.cl/twxbu>.
- Caicedo, Aparicio y Arriana Tanca. 2018. *Noche larga No liberal. Realidad detrás del mito populista*. Guayaquil: Fundación Ecuador Libre.
- Celi, Israel. 2020. “Del Correísmo al Anti-Correísmo. Radicalismo, polarización y cambio político en Ecuador”. *Sur Academia*, 7 (13): 81-98. <https://n9.cl/ld5wsx>.
- Chaparro, Adolfo. 2022. “Revolución molecular y estallido social en Colombia”. En *Pensar en marcha: filosofía y protesta social en Colombia*, editado por Delfín Ignacio, Grueso Vanegas, et al. Buenos Aires: CLACSO.
- Chiasson-LeBel, Thomas. 2019. “Neoliberalism in Ecuador after Correa: A surprise turn or according to economic elites' plan?”. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 108: 153-174.
- Chiriboga, Andrés. 2019. “La gestion de la liquidité dans l'économie du Bien Vivre”. *Crisol*, 9: 1-26. <https://n9.cl/819fa>.
- El Comercio. 2022. “Guillermo Lasso dijo que el paro de junio fue financiado por el narcotráfico”. *El Comercio*, 8 de julio. <https://n9.cl/yf0sv>.
- El Universo. 2008. “Iglesia católica no acepta 4 temas de nueva Constitución”. *El Universo*, 29 de julio. <https://n9.cl/i3t0x>.
- Enríquez, Eduardo. 2019. “Understanding Latin American Anti-Populism”. *APSA Preprints*. <https://doi.org/10.33774/apsa-2019-kttcq>.
- Frieiro, Leonardo y Belén Sánchez. 2021. “Ecuador: el neoliberalismo por sorpresa”. *Revista Argentina de Ciencia Política*, 1 (26): 125-164. <https://n9.cl/dxlvx>.
- Goffman, Erving. 1970. *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editores.
- Grugel, Jean y Pía Riggirozzi. 2012. “Postneoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis”. *Development and change*, 43 (1): 1-21.

- Guamán, Adoración y Soledad Stoessel. 2022. “Del derecho al trabajo digno al régimen laboral neoliberal: captura estatal y autoritarismo en el Ecuador contemporáneo”. *Revista latinoamericana de derecho social*, 35: 211-238. DOI: <https://n9.cl/3modp>.
- Hernández, Virgilio. 2023. “Lawfare recargado, reforma constitucional y bloqueo político: el caso de la revolución ciudadana en Ecuador”. En *Guerras jurídicas contra la democracia*, coordinado por Ernesto Samper, Larissa Ramina y Carol Proner. Buenos Aires: ELAG / Instituto Joaquín Herrera Flores.
- Houtart, François. 2015. “El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial”. *CADTM Comité para la abolición de las deudas ilegítimas*, 27 de agosto. <https://n9.cl/nkghc>.
- Illouz, Eva. 2023. *La vida emocional del populismo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- King, Katiushka. 2020. “Ecuador paga y renegocia su deuda externa en medio de la Covid-19”. *Análisis Carolina*, 52: 1-11. <https://n9.cl/eoote>.
- Luna, Juan Pablo y Rovira Kaltwasser, editores. 2014. *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Observatorio de Derechos y Justicia, Organización Venezuela en Ecuador, y Acción Jurídica Popular. 2019. “Informe sobre la detención de 19 ciudadanos extranjeros y nacionales en Tababela el 11 de octubre”. <https://n9.cl/vnyy0>.
- Pazmiño, Mario. 2022. “Estas son las estrategias de desestabilización empleadas para destruir el país”. *Plan V*, 29 de junio. <https://n9.cl/mrtpu>.
- Quintero, Rafael y Erika Silva. 2011. “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el ‘putsch’ del 30 de Septiembre del 2010”. *Observatorio Latinoamericano*, 7. Buenos Aires: UBA-IEALC, 26-40.
- Ramírez Gallegos, Franklin. 2023. “¿Nuevo giro a la izquierda o transformación del conflicto político?”. *Cuestiones de Sociología*, 28: e156. DOI: <https://n9.cl/jf0fjy>.
- Ramírez Gallegos, Franklin y Soledad Stoessel. 2018. “El incómodo lugar de las instituciones en la ‘populismología’ latinoamericana”. *Estudios políticos*, 52: 106-127. DOI: <https://n9.cl/cvv9p8>.
- Rosanvallon, Pierre. 2007. *El modelo político francés: la sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ruiz, Miguel. 2019. “¿De vuelta al corral? El giro de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos”. Ponencia presentada en el XXXII Congreso ALAS, diciembre. Lima. <https://n9.cl/i8dfq2>.
- Salgado, Wilma. 2018. “Paquetazo para toda una vida”. *Ecuador Debate*, 104: 7-23. CAAP.
- Semán, Ernesto. 2021. *Breve historia del antipopulismo: Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Stavrakakis, Yannis. 2017. “How did ‘populism’ become a pejorative concept? And why is this important today?”. *POPULISMUS*, Working Papers 6, abril. <https://n9.cl/u02pqx>.
- Stefanoni, Pablo. 2021. *¿La rebeldía se volvió de derecha?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Stoessel, Soledad y Olga Bracco. 2024. “Antipopulismos en América Latina desde una perspectiva histórica”. *Historiapolitica.com*, 146. <https://n9.cl/a2ieo>.

- Stokes, Susan C. 2001. *Mandates and democracy: Neoliberalism by surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Dyck, Brandon. 2019. "Why Not Anti-Populist Parties? Theory with Evidence from the Andes and Thailand". *Comparative politics*, 51 (3): 361-383.
- Weyland, Kurt. 2019. "Populism and authoritarianism". In *Routledge Handbook of Global Populism*, editado por Carlos de la Torre. London: Routledge.
- Zambrano, Ricardo. 2022. "Conaie puede identificar infiltración correísta que vandalizó las protestas, pero el problema es que su presidente (Leonidas Iza) es muy próximo al correísmo", dice Yaku Pérez". *El Universo*, 30 de junio. <https://n9.cl/q58oi>.